



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Rama Judicial

Auto interlocutorio	12
Radicado	052663103001-2020-00246-00
Proceso	Ejecutivo
Demandante (s)	Banco Davivienda S.A. (NIT 860034313-7)
Demandado (s)	R.C.A Ingenieros Constructores S.A.S. (NIT 900465053-0) y Juan Guillermo Castro Rinaldi (C.C. 3.414.482)
Asunto	Declara inadmisible la demanda

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE  
ENVIGADO

Veintiséis de enero del dos mil veintiuno

Sobre la anterior demanda con pretensión de ejecución del Banco Davivienda S.A. contra R.C.A. Ingenieros Constructores S.A.S. y Juan Guillermo Castro Rinaldi, se hacen las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. El Decreto Extraordinario 806 del 2020 –que fue expedido, entre otros eventos, para “*flexibilizar la atención de los usuarios del servicio de justicia*”; “*para que los procesos no se vean interrumpidos por las medidas de aislamiento y garantizar el derecho a la salud de los usuarios de la justicia y de los servidores judiciales*”, implementó el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso jurisdiccional-, para lo cual estableció que se debe evitar “*exigir y cumplir formalidades presenciales o similares*” (art. 2º), por lo que dispuso, entre otras cosas, que la demanda y sus anexos, se puedan presentar en forma de mensaje de datos (art. 6).

Es de resaltar, además, que en la parte considerativa del referido decreto, se estableció: “*Este marco normativo procurará que por regla general las*

actuaciones judiciales se tramiten a través de medios virtuales y excepcionalmente de manera presencial. Por lo que se debe entender que las disposiciones de este decreto complementan las normas vigentes, las cuales seguirán siendo aplicables a las actuaciones no reguladas en este decreto”.

2. El Código de Comercio, en el art. 619, define los títulos valores como aquellos “*documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora*”, concepto que pone de presente, “entre otras características, *su fuerza o función legitimadora, en virtud de la cual invisten o facultan al tenedor legítimo, es decir a quien lo posea conforme a su ley de circulación*” (art. 647 ejusdem), para que *ejercite el derecho en ellos incorporado*, inclusive, cuando de acuerdo con las reglas del derecho común, éste no sea el titular de los mismos, particularidad que apareja, por consiguiente, la renuncia de cualquier intento de indagación respecto de la propiedad del derecho”<sup>1</sup>.

Según este estatuto, en los títulos valores el derecho se incorpora en el documento mismo<sup>2</sup>, por lo cual, ante la falta de pago, el tenedor legítimo puede acudir “al procedimiento ejecutivo” (art. 793 del C. de Co.), obviamente debiendo aportar el documento original, pues es el único que lo legitima para demandar<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Sentencia del 14 de junio del 2000, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

<sup>2</sup> “Lo primero que vemos en un títulovalor es el documento mismo, su materialidad. También el propio nombre empieza por “título”, primer elemento del neologismo compuesto “títulovalor”. Por esto iniciamos su estudio por esta característica, por la unión al papel, al instrumento, al documento, a la materia que lo expresa” (...) El derecho literal nace de la incorporación (...) Incorporar. Entrar en el cuerpo. Hacerse cuerpo en algo. Cuando un documento es prueba de un derecho, es un testimonio escrito de él, una certificación, tal vez la expresión o la imagen del derecho. Pero no es el derecho. El derecho que prueba el documento no se hace parte del documento. Este lo refleja, pero no está el derecho en él. El derecho subsiste separadamente. No se incorpora. En cambio el títulovalor es necesario para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Hay pues, un derecho distinto del de la relación fundamental, del acto o contrato en que se origina” (Sanín Echeverri, Eugenio. Títulos Valores, quinta edición, págs. 21 y 26).

<sup>3</sup> “Cuando la ley requiere el original, como ocurre en la ejecución fundada en títulos valores, expresamente lo reclama” (Ramírez Gómez, José Fernando. La prueba documental, Señal Editora, Octava Edición, 2008, pág. 324).

Sobre la necesidad de la aportación del título valor original, así se ha pronunciado la jurisprudencia:

*“En virtud del principio de la autonomía, el derecho literal que contiene el título valor, se confunde con el mismo documento. Darle la dicha calidad a un documento que es incuestionable, solamente una copia, conlleva el riesgo de que el derecho cartular sea ejercido dos veces. Es decir, puede duplicarse el derecho y constituirse dos obligaciones independientes, una en el documento original y otra en la copia del mismo.*

*Solamente el documento original puede llevar inherente en él, el derecho literal que trata de ejercitarse, para que pueda predicarse que reúne las condiciones establecidas en el art. 619 del Código de Comercio”<sup>4</sup>.*

Es que -como lo reconoce la jurisprudencia-, “los principios rectores de la literalidad, incorporación, autonomía y legitimación que informan el derecho cartular, confieren al tenedor de un título valor garantías indispensables en orden al afianzamiento de su circulación, reclamada por la expansión del comercio y al propio tiempo por la seguridad que debe gobernar la actividad cambiaria”<sup>5</sup>.

3. En esa medida, entonces, no obstante que las medidas adoptadas en el mencionado decreto presidencial, tendientes a “facilitar y agilizar el acceso a la justicia ... evitando exigir y cumplir formalidades presenciales”, permiten que la demanda y sus anexos se puedan presentar en forma electrónica, se tiene que, tratándose de demandas ejecutivas, donde el soporte de la ejecución sean títulos valores no electrónicos o desmaterializados, no resulta aplicable dicha norma, porque aceptarlo así, sería desconocer de tajo la normatividad comercial, la cual está permeada , como se anotó, de

---

<sup>4</sup> Tribunal Superior de Bogotá, sentencia del 26 de enero de 1992. Extracto en la obra Código General del Proceso, de Editorial Legis, a continuación del art. 488.

<sup>5</sup> Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 19 de abril de 1993.

toda esa principialística que los inspira. La característica “*principal de los títulos valores es que ellos están destinados a circular como sustitutos de lo que representan (dinero, mercaderías o posibilidad de participación en la gestión de una sociedad) en forma muy simple, sin las trabas de la cesión de créditos o de los contratos*”<sup>6</sup>.

4. La exigencia no es caprichosa, ni debe mirarse como formalista al extremo de un “*ritualismo exagerado*”, ni que con ella se desconozca el principio de la buena fe de los sujetos procesales, sino que, por el contrario, está fundada en el imperio de la ley, en la prevalencia del derecho sustancial, en el respeto de las formas fundamentales que deben garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.

5. El permitir la ejecución sin la aportación del título valor, además de desconocer toda la parte sustancial relativa a su naturaleza, afecta en grado sumo el derecho de defensa del demandado:

5.1. Al no tener acceso al original, la posibilidad de proponer una eventual tacha de falsedad, se disminuye enormemente, pues cuando se trata de falsedades materiales, por superposición, adición, supresión, borraduras, raspaduras, tachaduras, etc., es indispensable constatarlo en el documento original mismo, lo que no podría hacer, ya que el título no está a su disposición para ser visualizado y ni siquiera del juez, pese a que ya le está corriendo el término perentorio para proponer la tacha como excepción (art. 270 del C.G.P.), el que no puede interrumpirse –o por lo menos es problemático-, con la petición que eventualmente haga el ejecutado de que se requiera al demandante para que lo aporte<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Rengifo, Ramiro. La letra de cambio, el cheque, el pagaré, los bonos, las acciones, Colección Pequeño Foro, quinta edición, pág. 6.

<sup>7</sup> ¿Será posible que la mera petición del demandado en ese sentido –que desea ver en forma física el título valor porque tiene dudas sobre su autenticidad- tenga la virtualidad de interrumpir el término de los diez (10) días que ya le están corriendo? ¿En qué norma se puede basar el juez para decretar la interrupción? ¿Qué pasa mientras tanto en ese interregno, si no hay pronunciamiento del juez? ¿Qué ocurre si éste ordena al demandante que aporte el original y no lo hace? En fin, son tantos los interrogantes y tantas las

5.2 El art. 116, num. 3º, del C.G. del P. establece que en “*todos los casos en que la obligación haya sido cumplida en su totalidad por el deudor, el documento contentivo de la obligación sólo podrá desglosarse a petición suya, a quien se entregará con constancia de cancelación*” ¿Cómo puede garantizar este derecho el juez, si no lo tiene en su poder? ¿Seá posible desplazar ese deber del funcionario judicial en la parte ejecutante –como se está haciendo en estos momentos por algunos despachos judiciales?

5.3 Puede facilitar la ejecución simultánea con base en un mismo título valor, con los innumerables problemas que esto puede ocasionar, lo que no quiere decir que se esté presumiendo la mala fe del acreedor o de su apoderado judicial, sino que el documento puede extraviarse o ser robado y presentado posteriormente al cobro judicial, pese a que ya se esté adelantado una ejecución con base en una reproducción digital<sup>8</sup>.

6. Así las cosas, como el decreto en mención no es derogatorio de la legislación vigente y mucho menos de los principios que inspiran los títulos valores, se declarará inadmisibile la demanda para que la parte demandante, en el término de cinco (5) días, allegue el título valor original soporte de la ejecución, lo cual puede hacer comunicándose por los canales dispuestos por este Despacho para la autorización, excepcional, de realizar un acto procesal de manera presencial<sup>9</sup>.

---

respuestas que se pueden llegar a ofrecer, que el mejor camino, es la exigencia del original, pues de este modo, se garantiza, por un lado, el cumplimiento de la ley –principio de legalidad (art. 7 del C.G. del P.), que dispensa seguridad jurídica-, y por el otro, un mejor ejercicio del derecho fundamental a un debido proceso, no dejando la solución al criterio de cada funcionario judicial, sino observando las normas procesales “*que son de obligatorio cumplimiento y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley*” (art. 13 *ídem*).

<sup>8</sup> Este es otro argumento, pero desde lo sustancial, para afirmar que se necesita el título valor original, porque, amparado por este decreto, un acreedor que haya perdido el documento y tenga una copia de él, simplemente la escanea y presenta la demanda ejecutiva sin acudir al trámite de cancelación y reposición previsto en el art. 398 del C.G. del P., lo que generaría una total inseguridad jurídica, cuestión que no puede patrocinar o avalar la jurisdicción.

<sup>9</sup> Es de advertir que este Juzgado, desde que se autorizó la presencia de funcionarios y empleados judiciales en las sedes, tiene siempre el porcentaje autorizado por el Consejo Superior de la Judicatura según las circunstancias, de modo que siempre va a estar uno disponible para recibir la documentación, obviamente acatando estrictamente los protocolos de bioseguridad.


Por lo expuesto, el Juzgado

R E S U E L V E:

PRIMERO: Declarar inadmisble la demanda, para que dentro del término de cinco (5) días, se dé cumplimiento al requisito exigido.

SEGUNDO: Reconocer al doctor Gustavo Amaya Yepes, como apoderado judicial de la parte demandante.

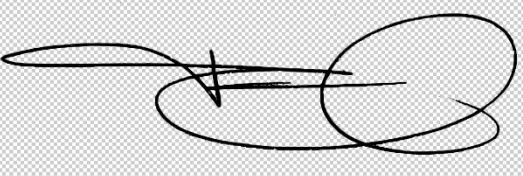
NOTIFÍQUESE

  
GERMÁN ALONSO FLOREZ HINCAPIÉ  
JUEZ

C E R T I F I C O

Que el auto anterior fue notificado en estado No. 006  
fijado hoy en la Secretaría del Juzgado a las 8 am

Envigado, 3 de febrero de 2020



Tatiana Corrales Ramírez  
Secretario